

El otro sapo

DANIEL
PACHECO



EL ESTÓMAGO DE LOS COLOMBIANOS se viene preparando, con resultados distintos, para digerir la entrada de miembros de las Farc a la política sin haber pasado por la cárcel. Pero luego del debate entre el procurador y el fiscal, quedó anunciado otro “sapo” en el menú que debería estar servido y listo antes de las elecciones de 2014. Por eso, más allá de la controversia jurídica de los siglos, es cada vez más urgente preguntarse ¿cuánto estamos dispuestos a tragar todos, de lado y lado, para acabar con la lucha política armada en Colombia?

El otro batracio sería perdonar los falsos positivos. Según dijo Ordóñez en el Externado, los falsos positivos son también crímenes de guerra, y al estar asociados al conflicto armado quedarían también incluidos en el proceso de justicia transicional que se aplique a las Fuerzas Armadas.

DE LABIOS PARA AFUERA



“Usted sabe el gran daño que hace a la sociedad desconocer a los más débiles dentro de los más débiles”.

Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación, quien desde el Vaticano pronunció estas palabras para criticar el derecho a abortar que, en Colombia, las mujeres tienen en tres casos específicos.

La silla vacía

FRANCISCO
LEAL
BUITRAGO



EN SECTORES SOCIALES —EN ESPECIAL independientes— hay preocupación sobre la eventual desaparición del movimiento ‘Pedimos la Palabra’. Y con razón. Fue una veloz puesta en escena, en el segundo semestre del año pasado, de ese nuevo movimiento político. Se identificó entonces con figuras públicas, como Antanas Mockus, Antonio Navarro, Cecilia López y otras cuantas. Fue algo así como el inicio de otra ‘Ola Verde’, alimentada por una coyuntura favorable. Pero este año languideció.

Dada la inercia de su ascenso, en el foro del pasado 28 de abril sobre Participación Política, convocado por la Universidad Nacional y Naciones Unidas para presentar propuestas de partidos, movimientos y organizaciones sociales con el fin de enviarlas a La Habana, hubo un cupo reservado en el estrado para ‘Pidamos la Palabra’. Y esa silla se quedó vacía.

Una salida “rara”, como dijo Marta Ruiz.

El procurador incluyó los falsos positivos entre los crímenes de guerra asegurando que un proceso de justicia transicional a la medida que él propone garantizaría que ni los militares ni las Farc estarían exentos de pagar algún tipo de pena. Pero si de La Habana el Gobierno vuelve con un acuerdo con la guerrilla que les promete libertad a cambio de dejar las armas (como todo indica que sucederá), la lógica del “ni unos, ni los otros” de Ordóñez nos dejaría ante la posibilidad de incluir los falsos positivos en el paquete de perdón a los militares.

Este escenario está apenas dibujándose. A pesar de las airadas objeciones a la idea que han hecho el senador Roy Barreras y el fiscal, el Gobierno ha dejado en claro que aún no está decidido cuál será el contenido de la ley estatutaria que defina qué cabe dentro del Marco Jurídico para la Paz. El presidente mismo sugiere que también está pensando bajo la lógica de “ni unos, ni los otros”. Desde la Escuela Superior de guerra Santos afirmó que “No va a haber esa situación de que nuestros soldados van

a ir a la cárcel por cuestiones que tienen que ver con el conflicto y vamos a ver a unos guerrilleros libres por hechos que tienen que ver con el mismo conflicto”.

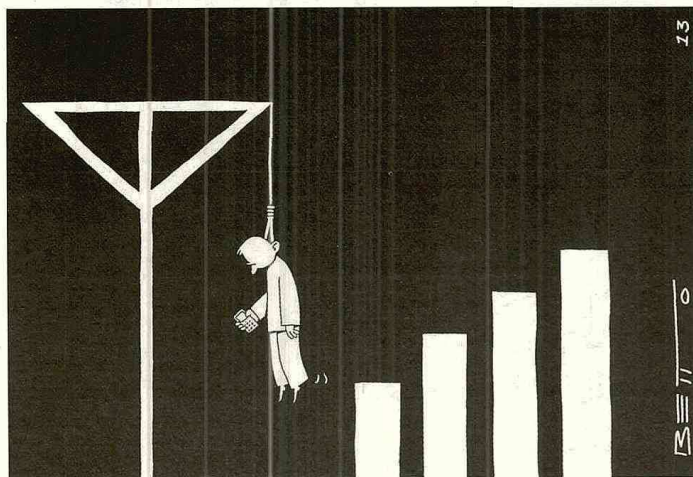
La pregunta obvia, si los falsos positivos califican o no como crímenes de guerra, podría terminar siendo la menos decisiva. Tal vez es más importante preguntar qué tan necesario será incluir los falsos positivos en el ajedrez posterior a un acuerdo con las Farc.

Cuando le llegue el momento al Gobierno de negociar en Colombia lo que pactó en La Habana —que pinta ya como la etapa más difícil—, el sapo que engendró el procurador podría ser crucial para contrarrestar el reflujo ácido que la sola posibilidad de tener a Iván Márquez en el Congreso ya causa en los uribistas, el procurador, los ganaderos y los miles de víctimas de la guerrilla.

Por otro lado, quienes apoyamos el proceso haríamos bien en anticipar que no será la derecha colombiana la única que tendrá que tragarse sapos de importante talla, si es que queremos lograr la paz.

@danielpacheco

Betto



Sin señal

¿Pero por qué tal preocupación? El país político se halla en un escenario muy particular. En el trasfondo se observa una opinión pública polarizada, a causa de una confrontación instigada por poderosos intereses egoístas, que juega con la tragedia de una sociedad signada por la violencia e identificada con altos índices de inequidad.

Y en su primer plano se ve el comienzo de un proceso electoral atravesado por las conversaciones de La Habana, un gobierno regido por el pragmatismo, un Congreso que compete en descrédito con buena parte de las cortes y unos gobiernos departamentales y locales insuflados por el clientelismo y la corrupción. Las encuestas de opinión indican la baja favorabilidad de casi todos sus mandatarios.

De esta manera, se ha ampliado un espacio vacío en las actividades políticas de los últimos años, a la espera de que sea ocupado por fuerzas sociales que empujen al país para salir de este atolladero.

Pero, ¿qué ha ocurrido para que se haya ampliado este espacio? Los partidos políticos son apenas remedos de lo que deberían ser las normas que los rigen son pantomimas que disimulan ansias de poder y

enriquecimiento de gran parte de sus jefes, la izquierda demostró su incapacidad de llenar ese vacío y la ciudadanía como tal no existe en gran parte de la población, pues su marginalidad no le permite cumplir con sus deberes y reclamar sus derechos.

Las fuerzas que anhelan un cambio en esta situación están a la espera de que los acuerdos que salgan de La Habana incluyan propuestas para entronizar un remozado sistema político, que requeriría, sin embargo, una refrendación por parte de la voluntad popular. Pero de una voluntad que no cuente con mayorías intrínsecas. De ahí la importancia de un eventual éxito en los acuerdos que se firmen.

Este escenario deseable necesitaría la convergencia de sectores y organizaciones sociales, que bajo un liderazgo signado por principios mínimos conduzca a una reconstrucción de la democracia. Pero, con un panorama político fragmentado y sembrado de egoísmos, ¿podría pensarse en esa posibilidad? La eventual desaparición de ‘Pidamos la Palabra’ sin duda la reduce, pues implicaría la ausencia de una fuerza aglutinadora que ya había avanzado en tal propósito.

EL ESPECTADOR

El Espectador. Editado por Comunican S.A.
Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia
Conmutador: 4232300 Fax: 4055602
Línea de servicio al cliente Bogotá 4055540
Línea de servicio gratuita nacional
018000510903 Redacción: 4234822
Suscripciones: 4055540 o a la línea gratuita
nacional 018000510903 Publicidad:
Caracol Unidad de Medios: 4232300
ext. 1290 - 1565 www.elespectador.com

Cartas de los lectores

Del supersalud sobre una entrevista

Me refiero a la entrevista “Están pecando de manera grave frente al aborto”, concedida por el senador José Darío Salazar a Camila Zuluaga y publicada el pasado 6 de mayo en **El Espectador**. Considero importante precisar:

1. El intérprete autorizado de la Constitución es la Corte Constitucional. Por tal razón, sus fallos son de obligatorio cumplimiento so pena de incurrir tanto en sanciones penales como disciplinarias, independientemente de si se está de acuerdo con ellos.
2. La Corte señaló que a partir de la Sentencia C-355 de 2006 existe en Colombia el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres que se encuentran incurso en las tres hipótesis despenalizadas en dicho fallo. Lo anterior se puede constatar en las Sentencias T-585 de 2010 y T-841 de 2011.
3. Cualquier mujer que se encuentre en los tres casos despenalizados y desee interrumpir su embarazo puede acudir al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), al cual le corresponde garantizar el derecho fundamental a la salud de cualquier ciudadano.
4. La Circular 003 de 2013 de la Supersalud instructiva a las EPS en relación con los tres casos despenalizados, tiene como origen el cumplimiento de diferentes mandatos dictados por la Corte Constitucional a esta entidad, con el propósito de garantizar de manera efectiva el derecho fundamental mencionado. La Superintendencia no está ejerciendo ninguna actividad reglamentaria; lo que ha hecho es cumplir las órdenes de la Corte, vertidas en diferentes sentencias, entre otras la C-355 de 2006, T-988 de 2007, T-209 de 2008, T-946 de 2008, T-388 de 2009, T-585 de 2010 y T-841 de 2011.
5. Es una obligación de la Superintendencia velar porque se garanticen a través de los actores del SGSSS los derechos de las mujeres, por expreso mandato de la Corte Constitucional.

Gustavo Morales Cobo.
Superintendente Nacional de Salud.